

NUE 200-A-2018 (CM)

[REDACTED] contra **Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)**

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP): San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del veintiuno de mayo dos mil diecinueve.

1. Descripción del caso

I. [REDACTED] en adelante “los apelantes”, apelaron contra la resolución emitida por la Oficial de Información de la **Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)**, por denegar el acceso a información consistente en: “nombre de los servidores públicos y agentes privados salvadoreños que formaron parte de la comitiva en la que viajó el presidente de CEPA a la República Popular de China del 17 al 25 de junio de 2018 [SIC]”.

Al respecto, los apelantes manifestaron su inconformidad con la respuesta proporcionada, pues consideran que el Presidente del ente obligado conoce a las personas con quienes realizó el viaje a China; y por lo tanto, está obligado a brindar la información, agregando que en la resolución emitida por el oficial de información de CEPA, no indica a qué institución debe ser redirigida la solicitud de conformidad al artículo 68 Inc. 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

II. Este Instituto admitió el recurso de apelación, designando a la comisionada **María Herminia Funes de Segovia**, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. Es preciso señalar que la referida instructora finalizó el ejercicio de sus funciones el 8 de marzo del presente año.

En virtud de ello, mediante Acuerdo Ejecutivo N° 104 de fecha 20 de febrero de este año, consta que a partir del 23 de febrero del corriente, el Presidente de la República, nombró como Comisionada Suplente por las Asociaciones de Profesionales a la licenciada **Cesia Yosabeth Mena Reina**.

Por las razones antes expuestas, se sustituyó a la Comisionada **María Herminia Funes de Segovia**, por la Comisionada **Cesia Yosabeth Mena Reina**, con el objetivo que cumpla con la instrucción del presente procedimiento de apelación.

Mediante resolución emitida por este Instituto, se citó a las partes a una audiencia de avenimiento; en cuyo acto, únicamente compareció la apelante [REDACTED], pese haber sido notificados en legal forma y sin justificar motivo aparente, no asistieron a dicho acto.

Durante la tramitación de este proceso, el Presidente de CEPA, **Nelson Edgardo Vanegas Rodríguez**, por medio de sus apoderados generales judiciales, [REDACTED], rindieron informe justificativo en atención al artículo 88 de la LAIP, en el cual manifestaron: “no debe tenerse por válido lo manifestado por la parte apelante al considerar que el presidente de CEPA tiene conocimiento de con quienes realizó el viaje, y que por tanto, está obligado a brindar la información, por lo que, considerar que una persona tiene conocimiento de una situación o hecho, es algo que no se encuentra materializado en un documento que haya sido creado u originado por el titular”.

Además, el ente obligado exhibió en dicho informe que: “en la respuesta dada por la unidad administrativa, se indicó que se había recibido una invitación por parte de la Ministra de Economía, para que el titular de CEPA formase parte de la comitiva oficial para presentar el portafolio de inversiones de CEPA a inversionistas de la República Popular de China; por tanto, debía avocarse a dicho ministerio para buscar o investigar lo requerido”. También ofertó la prueba siguiente: a) copia simple de la invitación realizada por la Ministra de Economía; y b) copia simple de memorando UC-56/2018.

III. La audiencia oral se desarrolló con la comparecencia de la apelante [REDACTED] mientras que [REDACTED], pese a haber sido notificado en legal forma, no compareció a dicha audiencia. Por parte de **CEPA**, compareció su apoderado; el señor [REDACTED]. Asimismo, ninguno de los intervinientes ofreció prueba en dicha actuación.

Durante su celebración, la apelante ratificó lo señalado en el recurso de apelación; y además señaló que se solicitó el informe o agenda que haya desarrollado el presidente de

CEPA en dicho viaje; indicó que no hay información de lo que fue a realizar dicho titular en el Portal de Transparencia. También exteriorizó que lo solicitado es un informe donde debe establecerse la estadía, la agenda del viaje, la presentación y el público destinatario. Además expuso que en la respuesta de la oficial de información, no se adjuntaron documentos, tales como la invitación realizada por la Ministra de Economía.

Por su parte CEPA, ratificó lo rendido en el informe justificativo y expuso que el recurso de apelación presentado, consistió en el nombre de los servidores públicos y agentes privados salvadoreños que formaron parte de la comitiva en la que viajó el presidente de CEPA a la República Popular de China del 17 al 25 de junio de 2018; y que en ninguna instancia solicitaron algún informe.

Del mismo modo, indicaron que la información pública está contenida en datos, documentos, archivos, bases de datos y por no existir un documento donde se declaren cuáles fueron las personas que formaron parte de la comitiva, se vuelve imposible entregar esta información y no se encuentra materializado; por ser el Ministerio de Economía quién cuenta con toda la información y la documentación de la organización del evento.

2. Análisis del caso

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **I)** Análisis de los medios de prueba ofrecidos en el presente procedimiento. **II)** El análisis de la competencia del ente obligado frente a la información requerida. **III)** Obligaciones del Oficial de Información en la emisión de resoluciones.

I. En su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones otorgadas por las partes, es decir, constituye una actividad a instancia de parte que tiene como finalidad la comprobación de los hechos controvertidos en el litigio; y es contemplada en el derecho común como un derecho y a la vez como una carga.

La prueba, se encuentra regida por los principios de pertinencia, idoneidad, o contundencia y utilidad. Estos principios representan una limitación al principio de libertad de la prueba; sin embargo son sumamente necesarios, pues ello significa que no se debe focalizar recursos en la práctica o reproducción de medios que por sí mismos o por su

contenido, no sirvan, en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente impertinentes.

En ese contexto, el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), de aplicación supletoria en el presente procedimiento conforme al artículo 102 de la LAIP, contempla dos extremos que deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: la pertinencia y utilidad. En cuanto a la pertinencia el Art. 318 del CPCM, establece que no debe admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a la utilidad, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo, contempla que no deberá admitirse aquella prueba que según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos.

Bajo estas consideraciones, **CEPA** incorporó prueba documental consistente en: a) copia simple de memorando UC-56/2018, indicando que fue el Ministerio de Economía quien realizó la invitación; y, b) copia simple de la invitación realizada por la Ministra de Economía; y que estos documentos cumplen con los requisitos de la presentación de la prueba; la licitud, pertinencia y utilidad, al ser expedidos por funcionario y empleado público en el ejercicio de sus funciones, que guarda relación con la presente apelación y muestran la información con la que cuenta la Institución.

Respecto a la copia simple de conformidad con lo dispuesto en los artículos 330 inc. 2º y 343 del CPCM de aplicación supletoria en los procedimientos establecidos en la LAIP, las copias simples presentadas constituyen prueba de los hechos consignados en los documentos que reproducen, ya que no ha sido acreditada la falsedad de aquellas o de los instrumentos originales, debiendo valorarse conforme a las reglas de la sana crítica.

Con base a los elementos de prueba presentados, valorados conjuntamente, y conforme a la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos: (i) Que el Presidente de CEPA fue invitado por la Ministra de Economía a formar parte de una comitiva oficial para presentar el portafolio de inversiones de CEPA a inversionistas en la República Popular de China; indicando que dicho Ministerio documentó y gestionó todas las actividades realizadas en Misión Oficial; (ii) Que el 11 de junio de 2018, la Ministra de Economía, Luz

Estrella Rodríguez, mediante misiva, invitó a realizar una visita exploratoria por la República Popular de China, solicitándole que se hiciera acompañar de su portafolio de inversiones.

II. Ahora bien, corresponde determinar con base a los hechos probados señalados anteriormente, si la resolución impugnada es conforme a derecho.

El acceso a la información pública impone simultáneamente el deber correlativo del Estado y de los demás entes obligados, para garantizar la entrega oportuna, veraz, completa y fidedigna de la información pública, o **fundamentar la imposibilidad de acceso**, con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución¹. Es importante indicar que el DAIP no se limita a la fiscalización del uso de los fondos públicos, sino que está orientado a determinar si todos los servidores públicos realizan su función pública de manera eficiente y cumplen con la misión que les ha sido asignada.

Para el caso en comento, los apelantes requirieron información de naturaleza pública, en lo concerniente al quehacer estatal relacionado a la visita exploratoria para fortalecer la estrategia de inversión extranjera en la República Popular de China.

Sin embargo, CEPA manifestó en el informe de defensa relativo al artículo 88 de la LAIP y en la Audiencia Oral respectivamente, su incompetencia en la entrega de la información objeto de este proceso; pues, según lo establecido en el artículo 2 de la LAIP, ellos no generan, administran o tienen en su poder la información solicitada; es decir, consideran que de acuerdo al contenido de la Ley, no son los obligados a proporcionar la información requerida. Así pues, dado que la controversia se centra fundamentalmente en determinar si CEPA tiene la obligación de dar trámite a la solicitud de información, este Instituto deberá pronunciarse sobre este punto.

El artículo 86 de la Constitución, los funcionarios del Estado son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, por lo tanto para que CEPA, tenga la obligación de dar trámite a una solicitud de información, es necesario que

¹ Resolución Definitiva emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, el día 2 de mayo de 2013, en el proceso de referencia NUE 1-A-2013.

tenga competencia para ello o que, cuando menos, exista algún vínculo jerárquico entre un ente y otro.

Según la prueba aportada por el ente obligado, se constata que el Presidente de CEPA, fue invitado por la Ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, mediante correspondencia, con el objetivo de realizar una visita exploratoria por la República Popular de China, solicitándole que se hiciera acompañar de su portafolio de inversiones.

Por tanto, CEPA no cuenta con la obligación legal de poseer la totalidad de la información, únicamente la información concerniente al quehacer institucional relacionado con dicha misión oficial, así por ejemplo: nombre del funcionario, destino, objetivo del viaje, valor del pasaje, si el gasto hubiese sido sufragado por dicha institución, viáticos asignados, y cualquier otro gasto emanado del presupuesto de CEPA, además cualquier información de las actividades desarrolladas en dicha misión, por tratarse de información que fiscaliza el cumplimiento de la tarea institucional con fondos públicos.

En este sentido, CEPA carece de competencia para tramitar y entregar: “los nombres de los servidores públicos y agentes privados salvadoreños que formaron parte de la comitiva en la que viajó el presidente de CEPA a la República Popular de China del 17 al 25 de junio de 2018”, implica la imposibilidad de entregar la información solicitada, por tratarse de atribuciones legales y controles internos específicos de otra institución del Estado; para el caso el Ministerio de Economía.

III. De la vista del expediente administrativo, remitido por CEPA; se deja ver la resolución impugnada, con referencia Res_UAIP_ 75/2018, la cual consta en el folio 7 de dicho expediente y su correspondiente remisión a los apelantes, mediante correo electrónico, con fecha 17 de septiembre de 2018.

La configuración de dicha resolución en su parte resolutive, consta de dos numerales; el primero de ellos, relativo a una prevención realizada a los apelantes y el segundo, objeto de controversia en el presente proceso, la determinación de la incompetencia para conocer y entregar el nombre de los servidores públicos y agentes privados salvadoreños que formaron parte de la comitiva en la que viajó el Presidente de CEPA a la República Popular de China del 17 al 25 de junio de 2018.

De la observancia de dicha resolución, se devela que no se adjuntan documentos relacionados al pronunciamiento de incompetencia y tampoco se orienta a los interesados a la entidad que deben dirigirse. También se observa la insuficiencia de fundamentos, precisando las razones de hecho y derecho que determinaron e indujeron a la entidad adoptar dicha decisión.

Este Instituto, ha valorado que la labor que reviste al Oficial de Información debe ser activa y no simplemente limitarse al traspaso de documentos, sino que debe ser una guía efectiva para las unidades administrativas y los administrados².

Es bien sabido que no puede generarse exigencia a los ciudadanos para conocer la determinación exacta del cúmulo de documentos generados, administrados o en poder de los entes obligados y sus dependencias. Los ciudadanos necesitan orientación para ubicar la información que requieren, para realizar tal labor se requiere el auxilio en la ubicación de la información y se brinde una orientación completa a fin que el interesado obtenga la información, en razón de lo expreso por el artículo 68 inc. 2º de la LAIP.

Por otro lado, es importante señalar que las resoluciones emitidas por el oficial de información, en caso de ser negativa su respuesta, siempre deberán fundarse y motivarse las razones de la denegatoria de la información e indicar al solicitante los recursos que pueden interponerse³.

Es así, según la valoración de este Instituto, que la resolución emitida por la Oficial de Información de CEPA, debe ser fundamentada y motivada, indicando las razones de la incompetencia alegada; y orientando a los peticionarios la entidad a la que debe dirigirse.

3. Decisión del caso:

De conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, además de los Arts. 6 y 85 de la Constitución; arts. 3, 29, 58 letras a), b) y d), 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

² Resolución Definitiva emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, el día 16 de octubre de 2017, en el proceso de referencia NUE 124-A-2017.

³ Artículo 72 de la LAIP.

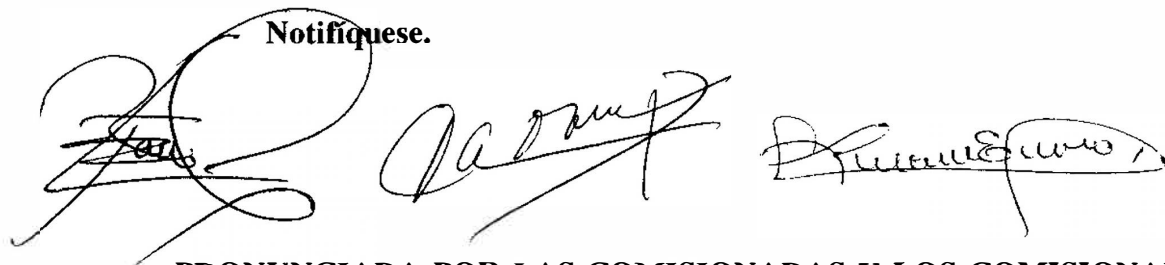
a) **Modificar** la resolución emitida por la oficial de información de **CEPA**, correspondiente al presente caso, motivando las razones de la incompetencia alegada y orientando a los peticionarios, a la entidad que debe dirigirse; dentro del plazo de 24 horas contadas a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución.

b) **Ordenar** a **CEPA** que veinticuatro horas después de finalizado el plazo mencionado en el literal a) remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Dicho informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv

c) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

d) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

KR/CC